



Permisología: ¿un debate artificial?

En una reciente entrevista para el periódico web Ex Ante, el conocido ingeniero y profesor Mario Waissbluth, fundador de Educación 2020 y de Amarillos por Chile –un tipo a quien nadie podría calificar de capitalista salvaje o amante del neoliberalismo– declaró con evidente alarma con respecto a la “permisología” estatal en Chile: “No creo exagerar si digo que está costando entre 2 y 3% en la tasa de crecimiento del PIB (...), no sólo por la tardanza que impone a los proyectos, sino por el ambiente generalizado de desánimo que está generando en los inversionistas y por la masiva fuga de capitales. Según la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, existen al menos 439 trámites que afectan la inversión en distintas etapas”.

El tema del exceso de trámites y permisos para ejecutar cualquier actividad económica en nuestro país se ha ubicado en el podio de los grandes debates nacionales, al constatar que es una de las trabas que está frenando nuestra capacidad de crecimiento, lo que ha obligado al gobierno del Presidente Gabriel Boric –otro individuo al que nadie podría calificar de capitalista salvaje o amante del neoliberalismo– a diseñar reformas legales para aliviar el problema.

En este contexto, las recientes sesiones de la Comisión de Economía del Senado dedicadas a la tramitación de un proyecto de ley sobre permisos sectoriales –destinado a reducir la “permisología”–, a la cual se ha invitado a representantes empresariales, académicos y de ONGs, han dado material de sobra para entender la profundidad del asunto.

En noviembre, ejecutivos de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) explicaron que el costo de evaluación ambiental de un proyecto aumentó a más del doble en solo cuatro años. En efecto, si en 2020 el costo de elaboración de una evaluación de impacto ambiental era alrededor de \$418 millones, actualmente bordea los \$950 millones; en ese mismo periodo, una declaración de impacto ambiental, usada para proyectos de menor envergadura, aumentó de \$130 a \$300 millones.

La semana pasada, en la misma comisión, el consorcio encargado de construir la conexión eléctrica Kimal-Lo Aguirre –la primera línea de transmisión de corriente continua en Chile, que unirá desde la región de Antofagasta hasta la Metropolitana– informó que, una vez logren superar la etapa de la evaluación ambiental y obtengan una resolución de calificación favorable (cosa que ya implica altos costos y años de trámite), se enfrentarán a la titánica tarea de obtener ¡4.941 permisos sectoriales!

A quienes discuten que la permisología sea un problema real, diciendo que se trata de un mote inventado por empresarios que aspiran a eliminar todas las regulaciones, sería bueno que estudiaran el caso de la construcción del megapuerto de Chancay, en Perú, en donde los inversionistas debieron entenderse con una sola autoridad portuaria del país, mientras que para hacer algo similar en Chile habría que vérselas con una miríada de organismos públicos, todos muy conscientes y celosos de su propio poder, y dispuestos a demostrar que son capaces de usarlo aunque eso signifique hacer fracasar un proyecto. Como pasa con el célebre Consejo de Monumentos Nacionales, que ha paralizado obras públicas y privadas por hallazgos tan “relevantes” como trozos de alambre, botellas de bebidas, hojas de periódico o bototos abandonados.

Ese celo tan mal entendido entre ciertas capas de la burocracia estatal, de creer que a los emprendedores y empresarios les hacen un favor si los atienden, o que están en sus puestos para exigir y sancionar antes que para facilitar y enseñar, lo sufren a diario desde grandes empresas hasta la más humilde emprendedora que quiere instalar un puesto de sopaipillas.

Se agradece el esfuerzo del gobierno por reducir el exceso de trámites. Aunque las medidas actualmente en discusión puede que no sean exactamente lo que se precisa, al menos hay oportunidad para que en el Congreso Nacional se mejoren. Sin embargo, también habrá que hacer algo para cambiar la cultura y prácticas del aparato estatal.

Chile atraviesa por un momento crítico y este es uno de los debates que decidirán si retomamos la senda del progreso o seguimos en un lento y progresivo estancamiento.

Ricardo Guerrero
gerente de la Corporación Industrial para el
Desarrollo Regional de Coquimbo.